

OPINIÓN | CARMEN ÁLVAREZ (PTA. DIRECCIÓN PROVISIONAL CCOO BURGOS) Y ANA FERNÁNDEZ DE LOS MUROS (SEC. REGIONAL CCOO)

Desafíos de la economía de Burgos

LA INMIGRACIÓN
SOSTIENE LA
POBLACIÓN Y
VARIAS ÁREAS
ECONÓMICAS



Las últimas tecnologías mecánicas y la digitalización están cambiando el panorama diario de las industrias. / VALDIVIELSO

Aunque comparte elementos con el resto de Castilla y León, lo cierto es que Burgos es una provincia muy singular y sus variables económicas y laborales descolan claramente por encima de las medias autonómicas y, en algún caso, nacionales; sin embargo, como señala la Fundación Caja de Burgos en su informe sobre la industria de Burgos 2024, también se advierten elementos inquietantes, signos de agotamiento de un modelo que deben llevar a la reflexión y a la acción para impedir que la trayectoria industrial de la provincia, su papel como nodo logístico, su potencial para atraer inversión y empleo, pierdan fuerza y posicionamiento en un momento de transformación y volatilidad como el presente.

La solidez de su tejido industrial, que es sin duda el rasgo más importante de la economía y el mercado de trabajo de Burgos, presenta también fuertes contrastes.

Junto al contraste que revela la densidad de población de la capital (1.649 hab/Km²), frente a la media de la provincia, (25 hab/Km²), reflejando la fuerte concentración de la producción y el empleo en una parte muy pequeña del territorio, es manifiesto también el contraste, dentro del propio tejido industrial allí donde se concentra, entre unas cuantas empresas de gran tamaño y una mayoría de pymes y micropymes con dificultades para crecer e incluso para mantenerse en un contexto complejo y cada vez más competitivo. Las grandes empresas mantienen y concentran progresivamente su producción, teniendo generalmente en Burgos plantas de fabricación, que no sus centros de investigación avanzada, ni sus centros de poder y decisión. Las pequeñas empresas, entretanto, se siguen reduciendo y encogiendo.

Con ello continúa aumentando la dependencia laboral de esas empresas grandes, cuyo carácter en muchos casos de multinacionales no asegura un arraigo indefinido al territorio, como ya hemos visto tantas veces con compañías que deciden reestructurar o cambiar de lugar sus centros de producción.

Por eso es tan importante impulsar y apoyar a las pequeñas empresas locales y prestarles el apoyo necesario para su adaptación a los cambios productivos y organizativos sin precedentes que se están produciendo. Y es muy importante propiciar y promover espacios de colaboración entre el tejido local de pymes y esas multinacionales o grandes empresas, además de la Universidad, los centros tecnológicos y los centros de Formación Profesional, de manera que se afiancen ecosistemas industriales solventes, más intensivos en tecnología y con mejor proyección de futuro. Los PERTE podrían haber sido una herramienta importante para esos objetivos y Burgos ha sido la provincia de Castilla y León con mayor volumen de fondos recibidos para estos proyectos. Pero su impacto parece que queda limitado una vez más a las grandes empresas.

Junto a ello, el descenso de población y su envejecimiento progresivo son problemas estructurales de la mayor gravedad en Castilla y León y también en Burgos. Casi 40.000 trabajadores y trabajadoras alcanzarán la edad de jubilación en la próxima década, fenómeno que en sectores como la agricultura y la construcción, donde ya se están manifestando problemas de mano de obra, amenaza con provocar muchas vacantes difíciles de cubrir en la provincia.

Ante esta situación parecen imprescindibles políticas que favorezcan la inmigración, en la que por cierto ya está descansando la incipiente recuperación demográfica de Burgos desde 2023. La inmigración puede contrarrestar el envejecimiento, contribuir al aumento de la población activa y al mantenimiento de la producción y el empleo; pero el desafío pasa también por la mejora de las condiciones de trabajo en esos sectores donde las personas emigrantes trabajan.

En cuanto al éxodo juvenil, especialmente el cualificado, hay que decir que pese a la sólida base industrial de Burgos, las ofertas de empleo para las personas jóvenes son demasiado a menudo insuficientes, precarias y de escasa cali-

dad, lo que impulsa a estas personas jóvenes y formadas a buscar oportunidades fuera de Castilla y León. Mientras tanto, el nivel formativo medio de las personas paradas de Burgos en 2024 siguió siendo bajo, el 64,76 % no tiene Bachillerato o formación equivalente, lo que requiere políticas activas mucho más ajustadas a las necesidades que apoyen con eficacia esa cualificación.

Desde CCOO somos conscientes de todos esos desafíos y aprovechamos los espacios de negociación colectiva, participación institucional y diálogo social para abordarlos. Durante los últimos años los esfuerzos de la negociación colectiva se han focalizado por necesidad sobre la subida de los salarios, congelados generalizadamente desde la crisis anterior, con la consiguiente pérdida sostenida de poder adquisitivo, y en un contexto de inflación y de incremento constante de los beneficios empresariales. Pero ahora es preciso que los convenios aborden también otras materias, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, y acometer la necesaria modernización de los procesos productivos, la digitalización y el cambio de patrón energético; y para ello, la estabilidad laboral y la formación permanente de las plantillas, la posibilidad para las personas trabajadoras de construir carreras profesionales en las empresas, con mejores salarios y expectativas, con servicios que faciliten la conciliación laboral y personal, deben ser objetivos clave, para la viabilidad del sistema y para atraer y retener el talento joven que ahora se va.

Esos objetivos están también trasladados a los espacios de participación institucional y diálogo social con los que contamos, tanto con el Estado, como sobre todo con la Junta y con las administraciones locales, especialmente los grandes ayuntamientos, cuyo papel es decisivo en materias tan relevantes para la ciudadanía como la gestión del suelo, la política de vivienda, la eficiencia energética y el apoyo al tejido productivo local o la mejora de los servicios públicos.

